



Radicado No. 13-001-33-33-008-2018-00203-00

Cartagena de Indias, diecinueve (19) de Septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Medio de control	ACCION DE TUTELA
Radicado	13-001-33-33-008-2018-00203-00
Demandante	FARIDES YOLANDA YEPES BUELVAS
Demandado	NUEVA EPS
Tema	PETICION
Sentencia no	0203

1. PRONUNCIAMIENTO

Mediante escrito presentado el día 6 de septiembre de 2018, ante la Oficina de Reparto y recibido en este despacho en la misma fecha, la señora **FARIDES YOLANDA YEPES BUELVAS**, actuando en nombre propio, promovió Acción de Tutela contra **NUEVA EPS**, encaminada a que se reconozca mi derecho fundamental de petición.

Por lo tanto, entra el Despacho a decidir sobre la presente acción, con fundamento en lo siguiente:

2. ANTECEDENTES

➤ PRETENSIONES

PRIMERO: Se conceda el derecho fundamental de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: Se conceda el derecho fundamental de petición interpuesto a la NUEVA E.P.S. en la fecha 4 de julio de 2018.

➤ HECHOS

Las pretensiones de esta acción constitucional se fundan en los siguientes supuestos facticos:

PRIMERO: La accionante en la fecha 25 de abril de 2018, asistió por medio de la NUEVA E.P.S. a una consulta externa con la doctora BEATRIZ HELENA LINCE VIDES, quien le prescribió MANOMETRIA ESOFÁGICA CON IMPEDANCIOMETRÍA.

SEGUNDO: En la fecha 2 de mayo de 2018 la NUEVA E.P.S. le realizo una PRE-AUTORIZACION DE SERVICIOS para la Clínica General del Norte S.A en la ciudad de Barranquilla.

TERCERO: En varias oportunidades se comunicó con la Clínica General del Norte pero esta manifiesta que a la fecha no tienen contrato con la NUEVA E.P.S. para este tipo de Examen.

CUARTO: La NUEVA E.P.S. por medio de escrito allegado en fecha 18 julio de 2018 pide excusa por los inconvenientes generados, por lo que le realizaran el cambio de autorización de servicio, estos a su vez informaran para proceder con respecto a la programación.





Radicado No. 13-001-33-33-008-2018-00203-00

QUINTO: Al no recibir información para la realización de la MANOMETRÍA ESOFAGICA CON IMPEDANCIOMETRIA, realizo una nueva petición radicada el 4 de Julio de 2018, pero hasta fecha la NUEVA E.P.S. no da respuesta al respecto.

CONTESTACIÓN

➤ NUEVA EPS

Manifiesta la demandada, que la entidad dio respuesta al derecho de petición el cual anexó a la contestación de la demanda a su vez el procedimiento solicitado por la parte demandante es NO PBS, por lo que la solicitud cambio de direccionamiento, una vez se genere la autorización de servicio se le informara a la señora FARIDES YOLANDA YEPES BUELVAS.

TRAMITES PROCESALES

La Acción de Tutela que se estudia fue recibida en este despacho el día 6 de septiembre de 2018, procediéndose a su admisión el mismo día; En providencia se ordenó la notificación a la entidad accionada, enviándose comunicación al buzón electrónico de la demandada a (fl.15). se le solicitó a la demandada rendir un informe sobre los hechos alegados en esta acción.

3. CONTROL DE LEGALIDAD

Atendiendo a la naturaleza del asunto y de acuerdo a las competencias establecidas en la ley, procede el Despacho a proferir sentencia dentro del presente proceso.

4. CONSIDERACIONES

La acción de tutela fue instituida en el artículo 86 de nuestra Constitución Política como mecanismo judicial para proteger los derechos fundamentales de toda persona cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en los casos taxativamente señalados en la ley, siempre y cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo el caso que de no proceder el juez, se configure un perjuicio irremediable.

Dicha garantía Constitucional, obedece precisamente al tipo de Estado que la Constitución de 1991 nos definió, es decir, siendo el Estado Colombiano un Estado Social de Derecho, responsabiliza a la administración la tarea de proporcionar a la generalidad de los ciudadanos las prestaciones necesarias y los servicios públicos adecuados para el pleno desarrollo de su personalidad.

➤ PROBLEMA JURIDICO

El problema jurídico a dilucidar en el presente asunto consiste en determinar si al accionante se le vulneró su derecho fundamental de petición al omitir dar una respuesta de fondo, clara y precisa a la petición elevada el día 4 de julio de 2018.





Radicado No. 13-001-33-33-008-2018-00203-00

TESIS

Luego de analizar las pruebas y los planteamientos presentados en ésta acción constitucional. el Despacho llega a la conclusión que en el caso concreto a la accionante aún le ésta vulnerando su derecho fundamental de Petición.

El Despacho constato que han transcurrido más de dos (02) meses desde que la parte actora elevó la petición ante NUEVA EPS. y no se observa que la respuesta brindada por dicha entidad no es congruente y completa de acuerdo a lo pedido; por el contrario, se observa que están dando respuesta a una primera petición de fecha 9 de mayo de 2018 a (folio 8) en la que solicita remitir la orden médica a otra entidad para que le realicen la MANOMETRIA ESOFAGICA CON IMPEDANCIOMETRIA que con urgencia requiere ya que en la CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. no tenia contrato con la NUEVA EPS para este tipo de examen, en la segunda petición de fecha 4 de julio de 2018 a (folio 12) direccionada a la NUEVA EPS la parte demandante solicita que autoricen lo más pronto posible la realización del examen médico en mención teniendo en cuenta que su salud se encuentra cada vez más deteriorada lo cual no le permite desarrollar sus actividades cotidianas. la NUEVA EPS no le dio respuesta a la presente petición.

Por consiguiente, y en virtud de lo anteriormente expuesto, éste Despacho amparará el derecho fundamental de Petición de la señora FARIDES YOLANDA YEPES BUELVAS, y como consecuencia de ello, ordenará a la NUEVA EPS, si aún no la ha hecho, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, responda de manera completa, concreta, congruente y de fondo el derecho de Petición que elevó la tutelante el día 4 de julio de 2018. y le comunique dicha respuesta.

Con fundamento en lo arriba expuesto, y como

NORMATIVIDAD - JURISPRUDENCIA APLICABLE.

El artículo 23 de la Carta Política faculta a todas las personas para presentar ante las autoridades peticiones respetuosas, así mismo la norma prescribe que los pedimentos deben obtener prontas resoluciones de fondo en forma clara y precisa.¹

A su turno, la jurisprudencia constitucional se ha ocupado en forma amplia de determinar el alcance y contenido del derecho de Petición, confirmando así mismo su carácter de derecho fundamental.²

De conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificado por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015), la administración tiene que resolver las peticiones en un plazo de 15 días, salvo que debido a la naturaleza del asunto requiera de un término mayor, evento éste en el cual la autoridad está en la obligación de informar al peticionario, en el mismo término, cuánto tiempo requiere para decidir de fondo el asunto y el plazo razonable en el que lo hará.³

En los términos antes descritos, cuando la Administración no cumple con su obligación legal de resolver las solicitudes que se le formulen, en forma clara y precisa, teniendo en cuenta el contenido de las mismas, dentro del término de ley que se le otorga para esos fines, incurre en

¹ Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2004

² Al respecto ver entre otras las sentencias T-796/01, T-529/02, T-1126/02 y T-114/03.





Radicado No. 13-001-33-33-008-2018-00203-00

vulneración del derecho fundamental de Petición, toda vez que el peticionario queda sometido a una situación de incertidumbre, al no obtener una efectiva contestación a sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos.⁴

Lo anterior encuentra fundamento en los reiterados pronunciamientos de la H. Corte Constitucional al señalar que el derecho de petición en su contenido⁵ comprende los siguientes elementos⁶: i.) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas (núcleo esencial)⁷; ii.) Una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, **así como clara, precisa y de fondo o material**⁸, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y **de manera completa y congruente**, es decir **sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados** y iv.) **Una pronta comunicación de lo decidido al peticionario**, independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido⁹. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Así mismo, la Corte ha expresado que una respuesta es: i.) **Suficiente** cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a sus pretensiones¹⁰; ii.) **Efectiva** si soluciona el caso que se plantea¹¹ (C.P., Arts. 2º. 86 y 209) y iii.) **Congruente** si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta^{12,13}

De igual forma, la corte constitucional en sentencia T- 332 de 2015, explicó que:

"La Constitución Política en su artículo 23, consagra el derecho fundamental de toda persona a presentar peticiones respetuosas en interés general o particular ante las autoridades y a obtener de ellas pronta resolución de fondo.

La Corte Constitucional se ha referido en distintas oportunidades a la importancia de esta garantía fundamental, cuya efectividad, según se ha reconocido, "resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (artículo 2º. Constitución Política)".

¹⁰ Sentencias T-1160A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-581 de 2003.

¹¹ Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

¹² Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

¹³ Cf. Sentencia T-627 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.





Radicado No. 13-001-33-33-008-2018-00203-00

En lo referente a las reglas fijadas por la jurisprudencia para la garantía de este derecho fundamental, se destaca que la Corte en la sentencia atrás citada, determino frente al alcance, núcleo esencial y contenido de este derecho. lo siguiente:

"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

*c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. **oportunidad** 2. **Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado** 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. **(Subrayas del despacho)***

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.





Radicado No. 13-001-33-33-008-2018-00203-00

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994."

Posteriormente, esta Corporación añadió dos reglas adicionales: (i) que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no exonera a la entidad del deber de responder; y (ii) que la respuesta que se profiera debe ser notificada al interesado.

Por lo anterior, la efectividad del derecho fundamental de petición se deriva de una respuesta pronta, clara y completa por parte de la entidad a la que va dirigida. La falta de alguna de estas características se materializa en la vulneración de esta garantía constitucional".

Así las cosas, la vulneración del derecho de petición se presenta por la negativa de un agente de emitir respuesta de fondo, clara, oportuna, y en un tiempo razonable, y por no comunicar la respectiva decisión al petente.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición es un derecho fundamental que se presenta de una forma compleja pues, en primer lugar, constituye la herramienta de ejercicio de los demás derechos fundamentales, pese a lo cual no pierde su naturaleza de derecho fundamental autónomo, pero, además, tiene como fin salvaguardar la participación de los administrados en las decisiones que los afectan.

Del análisis anterior, se destaca que el derecho de petición exige por parte de las autoridades, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano. Esto implica la proscripción de respuestas evasivas o abstractas, pero ello no quiere decir que necesariamente la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición.

CASO CONCRETO

Ahora bien, se encuentra comprobado que la parte accionante efectivamente presentó una petición ante el ente accionado (folio 12), por lo que es preciso señalar que luego de analizar las pruebas y los planteamientos presentados en ésta acción constitucional, el Despacho llega a la conclusión que en el caso concreto la señora FARIDES YOLANDA YEPES BUELVAS, aún se le ésta vulnerando su derecho fundamental de Petición.

En efecto, está probado al interior del expediente de tutela, que el día 4 de julio de 2018, la accionante radicó derecho de petición ante la demandada, con el fin que se le autorice lo más pronto posible la MANOMETRIA ESOFAGICA CON IMPEDANCIOMETRIA ordenado por la doctora BEATRIZ HELENA LINCE VIDES el 25 de abril de 2018.

Observa el Despacho, que han transcurrido más de (02) meses desde que la parte actora elevó la petición ante la NUEVA EPS., la cual hasta la fecha no contestó y fue evasiva, lo cual genera una dilación injustificada en la resolución de la solicitud de la actora.

A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta lo siguiente:

La parte demandante asiste a una consulta externa con la doctora BEATRIZ HELENA LINCE VIDES el 25 de abril de 2018 quien le diagnostico una MANOMETRIA ESOFAGICA CON IMPEDANCIOMETRIA, la NUEVA EPS el mismo día le hace entrega de la PRE-AUTORIZACION





Radicado No. 13-001-33-33-008-2018-00203-00

DE SERVICIOS para que la CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. la cual está ubicada en la ciudad de Barranquilla le realizara dicho examen.

Al comunicarse la parte demandante para solicitar la cita médica la entidad le manifiesta que la CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A no tiene contrato con la NUEVA EPS para este tipo de examen médico por lo que la actora mediante oficio de fecha 9 de mayo de la presente anualidad, manifiesta su inconformismo. la NUEVA EPS en respuesta del 18 de julio de 2018, manifiesta a la demandante que en cuanto se realice el cambio de AUTORIZACION DE SERVICIO le informara para proceder a la programación del mismo a su vez pide excusas por los inconvenientes generados para dar cumplimiento a su objetivo que es velar y garantizar que la prestación de servicios requeridos por sus afiliados y se brinde de acuerdo a los principios de oportunidad, seguridad y calidad, por lo anterior le pide que radique nuevamente la documentación necesaria, para dar trámite y se pueda dar cumplimiento a la programación de la cita. En vista de no recibir respuesta al respecto la accionante radica petición en fecha 4 de julio de 2018 solicitando se autorice lo más pronto posible la orden para el examen médico de fecha 25 de abril de 2018 y hasta la fecha no tiene respuesta alguna.

Así pues, se percata el Despacho, que la NUEVA EPS no contestó la petición de la parte demandante. En este orden de ideas, el accionante tiene derecho a que se le brinde una respuesta acorde a lo pretendido. Por ende, es obvio que la demandada ha omitido dar una respuesta de fondo a lo pedido.

En virtud de lo anteriormente expuesto, éste Despacho amparará el derecho fundamental de Petición de FARIDES YOLANDA YEPES BUELVAS, y como consecuencia de ello, ordenará a NUEVA EPS, si aún no la ha hecho, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, responda de manera completa, concreta, congruente y de fondo el derecho de Petición que elevó la tutelante el día 4 de julio de 2018, y le comunique dicha respuesta.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5. FALLA

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de Petición de la señora FARIDES YOLANDA YEPES BUELVAS, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la NUEVA EPS, si aún no la ha hecho, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, responda de manera completa, concreta, congruente y de fondo el derecho de Petición que elevó el tutelante el día 4 de julio de 2018, y le comunique dicha respuesta.

TERCERO: Notifíquese por el medio más expedito al accionante y a la accionada (art. 30 del D. 2591/91).





Radicado No. 13-001-33-33-008-2018-00203-00

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


ENRIQUE ANTONIO DEL VECCHIO DOMINGUEZ
Juez

